

B. INSERCIONES

Inserción solicitada por el señor diputado Usandizaga

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de adopción.

La ley 23.204, de modificación al régimen de patria potestad y equiparación de hijos matrimoniales y extra-matrimoniales, la posterior 23.515 sobre reforma al régimen de matrimonio civil e incorporación del divorcio vincular, y la sanción por esta Cámara, en 1993, del proyecto de ley de unificación de la legislación civil y comercial, introdujeron sustanciales cambios al derecho de familia y sucesiones vigente en nuestro país.

Ello se complementa ahora con el tratamiento de un proyecto de ley de adopción, que intenta reformular el conjunto de normas que componen la ley 19.134 y sus modificatorias (leyes 23.264 y 23.515).

Sobre el particular deseamos rescatar los antecedentes que permitieron llegar a esta instancia en la labor parlamentaria.

Desde 1983 a la fecha se sucedieron numerosos proyectos de ley de modificación del régimen de adopción, entre los que cabe mencionar los de autoría de los di-

putados (m.c.) Unamuno (574-D.-83), María Cristina Guzmán (1.037-D.-93), María Florentina Gómez Miranda (3.497-D.-85), C. E. Ferré (2.829-D.-83), Roberto Irigoyen y M. F. Gómez Miranda (2.848-D.-89).

Asimismo, las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer y Minoridad se esforzaron en esos años en la búsqueda de un consenso que permitiera la sanción de un texto único, compatibilizador de las diferentes iniciativas.

En ese sentido, se arribó al Orden del Día Nº 1.483 de 1989 —no tratado por esta Cámara—, y reproducido por el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer y Minoridad en su composición de 1990-1991. Dicho texto legislativo se traduce con posterioridad en el proyecto de ley presentado por los diputados Gabriela González Gass, Luis González, Alfredo Bravo, Rodolfo Parente y Mabel Gómez Marelli (expediente 394-D.-92).

La intensa labor desarrollada en el tema, con la participación de especialistas multidisciplinarios y asesores

de esta Cámara, proponía un régimen legal que, al igual que el que nos ocupa, priorizaba la protección del menor por encima de todo otro valor: dar padres al menor desamparado o abandonado fue la premisa, rechazando toda consideración del instituto como un exclusivo medio de satisfacer paternidades imposibles.

La técnica legislativa elegida en dichas propuestas, fue la incorporación de las normas al Código Civil: derogación de la ley 19.134 y la inclusión de las disposiciones que regulan el régimen de adopción al Código Civil, en el título IV del libro I (artículos 311 a 323), antes dedicados a la legitimación, y en el título V del libro I (artículos 324 a 344), antes dedicado a los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos, disposiciones todas derogadas por la ley 23.264. Se incluían disposiciones en el título XIV del ministerio público de menores, así como en el título IX del libro IV, referido al orden de las sucesiones intestadas; también se proponían modificaciones a algunas disposiciones de la ley 18.248 de nombre de las personas.

Entre las normas que diferencian ese proyecto del que se encuentra en tratamiento en esta oportunidad, creemos útil comentar, al solo efecto de colaborar con futuras tareas de interpretación y estudio, las siguientes:

— La mínima diferencia de edad entre adoptante y adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y

— La edad para adoptar se fijaba en veinticinco años.

— Se incorporaba el instituto denominado "estado de adoptabilidad", cuya caracterización se definía con claridad en los fundamentos que acompañaban el proyecto de ley de los diputados Gabriela González Gass y otros (394-D-92, T.P. Nº 11 del 13 de mayo de 1992, página 884): "instituto destinado a resolver los casos de los menores en estado abandonado, por haber sido confiados a establecimientos públicos o privados de protección de menores y haberse desentendido injustificadamente los padres de sus deberes paternos durante el plazo que la autoridad judicial estime, no debiendo ser inferior a tres meses, o cuando el desamparo moral y material del menor resulte evidente y sea comprobado por la autoridad judicial, o cuando son los padres quienes manifiestan ante la autoridad judicial competente su voluntad de dar a su hijo en adopción. En estos tres

supuestos... el juez debe citar bajo pena de nulidad a los padres a una audiencia, a fin de evaluar las circunstancias del caso. Finalmente, recogiendo una norma de la legislación francesa, este estado de adoptabilidad no prospera cuando algún miembro de la familia pide hacerse cargo del menor y la petición es favorable al interés del mismo, preservando así el ámbito familiar originario del menor en estado abandonado".

Se incorporaba una disposición general con respecto a las unidades relativas considerándose tales las "... declaradas por el juez o tribunal teniendo en consideración el interés protegido de quien interpone la acción. El juez o tribunal debe convalidar la adopción si dicho interés se opone al interés del adoptado".

Por último, se avanzaba en normas de derecho internacional privado en cuanto a ley aplicable, jurisdicción y efectos de la adopción conferida en el extranjero:

a) La ley del domicilio del adoptado rige la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado como también los procedimientos, las formalidades conducentes a la constitución del vínculo y sus efectos, la capacidad para adoptar y los demás requisitos para ser adoptante. Los requisitos para la publicidad y registro de la adopción quedan sometidos a la ley del Estado donde se exige su cumplimiento;

b) El juez o tribunal del Estado del adoptando es competente en el otorgamiento de la adopción. Es competente para decidir la nulidad o revocación de la adopción el juez o tribunal del Estado del domicilio del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción; o el del actual adoptante y adoptado, a opción del actor;

c) La adopción conferida en el extranjero de conformidad a la ley del Estado del domicilio del adoptado puede convertirse de acuerdo al régimen de adopción regulado en este código, acreditándose dicho vínculo y prestando su asentimiento el adoptante y el adoptado, quien debe ser mayor de edad.

Concluimos esta reseña, de contenido meramente informativo, con la expresión de nuestro apoyo a la sanción del proyecto en análisis, en tanto se trata de una importante modificación al instituto de la adopción, que promueve la judicialidad de todo el procedimiento y protege los intereses del menor.